

Las mujeres y el mercado laboral en América Latina: ¿la alternativa neoliberal?

Maylin Cabrera Agudo

Centro de Estudios sobre América

“La principal lección de este desempeño en el período de las reformas es que la estabilidad macroeconómica **es la** condición necesaria pero no suficiente para el incremento del bienestar social.”

(OIT. *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe.*)

Introducción

Los años 80 en América Latina marcaron el inicio del proceso de consolidación de los llamados programas de ajuste estructural (PAE), promovidos estos por las instituciones financieras internacionales en alianza con las elites nacionales. Esta fecha señaló la transición desde la industrialización a través de la sustitución de importaciones, el proteccionismo y el Estado como actor fundamental en la economía, hacia la apertura, la liberalización y la desregulación de la economía doméstica. La crisis de la deuda externa en América Latina a principios de la década referida, constituyó su preámbulo.

Para los *países empobrecidos*,¹ la implementación de políticas neoliberales ha significado el creciente deterioro de sus pueblos en términos económicos, políticos y sociales. Esto se corrobora, entre otros elementos, mediante la persistencia de altos niveles de pobreza, de la desintegración social, de la regresiva distribución del ingreso y del consiguiente avance de la polarización a su interior.

La introducción de estas políticas en América Latina ha tenido como marco un complejo escenario social en el cual aspectos como la etnia, la raza, la clase social y el género han servido de filtro a su impacto en la región. En este sentido, y a partir del interés específico de estas líneas, considero relevante abordar la dimensión de género que ha acompañado al proceso de *neoliberalización* en América Latina, acotando el análisis al mercado laboral, uno de los espacios sociales donde la discriminación hacia las mujeres se hace más evidente. En el presente trabajo se entenderá por género el conjunto de relaciones sociales (económicas, políticas, culturales, jurídicas) que se tejen en función del proceso de construcción socio-histórica de la diferencia anatómo-fisiológica. Como categoría analítica permite analizar la realidad social a partir de su relevancia en la explicación de los diferentes procesos sociales en estrecha interrelación con las restantes categorías que definen dichos procesos.

¹ La distinción entre países *empobrecidos* y *enriquecidos*, en lugar de la más recurrente en las ciencias sociales (países desarrollados y países en vías de desarrollo) tiene por intencionalidad la incorporación al discurso social de conceptos que no reproduzcan las tradicionales relaciones de poder al interior de las ciencias sociales. Los términos *países desarrollados* y *países en vías de desarrollo* presentan dos dificultades fundamentales. La primera es que aparecen vaciados del contenido histórico que le sirvió de sustrato a dicha distinción, al no hacer alusión a los procesos de dominación que han legitimado la existencia de un orden mundial polarizado en términos de desarrollo: se toma como punto de partida el resultado y no las causas. La segunda dificultad se corresponde con que apunta a una pretendida tendencia al desarrollo de las naciones del tercer mundo (países empobrecidos) cuando indicadores básicos apuntan al progresivo deterioro en dichos términos.

En la primera parte del artículo se abordarán los principales rasgos del mercado laboral latinoamericano en el contexto neoliberal. Seguidamente se centrará la atención en sus especificidades desde una perspectiva de género; el mercado laboral femenino será la temática a analizar. La última parte se corresponderá con las reflexiones finales.

1. El mercado laboral latinoamericano en el contexto neoliberal

La crisis de la deuda externa en América Latina hacia principios de la década de 1980 sirvió de plataforma a la **implementación** de los llamados programas de ajuste estructural en el continente. Mediante estos, el conjunto de las instituciones financieras internacionales promovieron un grupo de condicionalidades de naturaleza neoliberal a cambio de financiamiento para una pretendida superación de dicha crisis. Sin embargo, lo que ciertamente ha ocurrido es el creciente reforzamiento de las raíces de dependencia y subordinación que históricamente han caracterizado al continente latinoamericano respecto a las grandes potencias mundiales.

Las políticas neoliberales han estado dirigidas a favorecer la estabilidad macroeconómica mediante una drástica reducción del gasto público y profundos procesos de privatización ligados fundamentalmente a empresas transnacionales. El debilitamiento del Estado en sus funciones de garante social y actor de peso en las relaciones económicas, así como una acentuada apertura comercial y financiera, han constituido piedras angulares de este proceso. La funcionalidad de estas políticas a los intereses *recolonizadores* de las grandes potencias mundiales constituye su verdadera razón de ser. Los intereses por privatizar recursos naturales como el agua, el petróleo y el gas natural son un claro ejemplo de ello.

El proclamado advenimiento de un significativo y progresivo desarrollo en la región a partir de la aplicación de las medidas mencionadas no se ha cumplido ni en la visión más ortodoxa del desarrollo que lo define como crecimiento económico, ni mucho menos en la más hereje que defiende la distribución social en calidad de tábula rasa. Aunque la OIT y la CEPAL señalaron el 2005 como el tercer año consecutivo en el cual tuvo lugar un crecimiento del PIB en Latinoamérica² y además proyectan un comportamiento similar para el 2006, estos mismos organismos refieren el hecho de que el período de **implementación** de los PAE ha sido testigo de los más bajos promedios anuales que al respecto ha conocido la región. La regresiva distribución del ingreso continúa caracterizando a América Latina como la más inequitativa en dichos términos, lo que ha cristalizado en altos niveles de pobreza (las cifras para el 2005, y consideradas las más bajas desde los años 80, alcanza no obstante valores

² En relación con este relativo crecimiento, resulta interesante constatar, a través de las propias estadísticas brindadas por estos organismos, que Venezuela es el país que más ha aportado a este crecimiento, seguido por Argentina, teniendo ambos una tasa anual de variación del 9,0 y 8,6 respectivamente. Uruguay ocupa el 4to lugar al respecto. De este modo, es válido repensar este crecimiento a partir de lo siguiente: está teniendo lugar de modo más marcado en el conjunto de países cuyos gobiernos, aunque no precisamente idénticos en cuanto a proyecciones políticas-ideológicas, sí recuperan, en diferentes medidas cada uno, la función económica y social del Estado.

significativos: 40,6% de pobres y 16,8% de indigentes).³ La persistencia de altos niveles de desempleo ha sido otro rasgo del período que nos ocupa, y ha estado acompañado de un notable peso, dentro del mercado laboral, del empleo informal, quedando sentadas las bases para lo que ha sido una drástica reducción del porcentaje de la población protegida por la seguridad social.

La desproporcional prioridad que al crecimiento económico ha dado este modelo de desarrollo, en detrimento de la distribución social, explica que al mismo tiempo que teje un discurso en función de solucionar los principales problemas que aquejan al continente, esté teniendo lugar una ofensiva contra aquellas instituciones que brindan las herramientas que servirían a tales fines. Un ejemplo muy ilustrativo lo constituye la centralidad que desde fines de la década de 1990 han otorgado el FMI y el BM a la ofensiva contra la pobreza: la construcción de proyectos elaborados con el objetivo de darle solución a este problema ha tenido como sustrato un fuerte proceso de privatización de las empresas estatales, del desmantelamiento del Estado como fuente importante de empleo y de cobertura en servicios de salud, educación fiscal y gratuita, seguridad social y otros servicios sociales importantes. De este modo, se pretende resolver un problema cuando al mismo tiempo se refuerzan las bases estructurales que le dan origen.

El creciente deterioro de la situación laboral ha constituido uno de los síntomas más elocuentes de las consecuencias que para América Latina ha traído la ejecución de medidas de corte neoliberal. Ello ha quedado explícito en importantes documentos de alcance internacional y regional, lo que da una medida de la visibilización que paulatinamente ha ido adquiriendo esta cuestión en ambos niveles. En la Cumbre del Milenio se consideraron los problemas de la insuficiencia de empleo y la baja calidad de estos como una de las cuestiones más apremiantes que América Latina debía resolver. Desde el año 1999 la OIT opera con la categoría "trabajo decente" apuntando hacia lo que se ha venido dibujando como un gran déficit de este. En su documento *Trabajo Decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015* se expresa que "en el plano laboral y social, los resultados de las reformas en el decenio del decenio fueron bastante decepcionantes". En su Informe de la Reunión de expertos sobre pobreza y género, la CEPAL⁴ describe la situación actual del mercado laboral en el continente como inestable y generador de grandes incertidumbres para la población, señala, además, los crecientes niveles de desempleo y subempleo que lo tipifican, así como la prácticamente ausencia de políticas laborales donde el pleno empleo ha dejado de ser una condición de una macroeconomía sana.

En tanto, las políticas laborales propuestas por el Banco Mundial han tenido por principales directrices las siguientes acciones:⁵

³ *Panorama social América Latina y el Caribe*, CEPAL, 2005.

⁴ *Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe*, CEPAL (formato digital).

⁵ Laura Frade Rubio, *Las implicaciones de la globalización económica y la internacionalización del Estado en las mujeres*, FEDIM, pp. 106-107 (fotocopia).

- modernizar los mecanismos de determinación de salarios mediante la descentralización del contrato colectivo de trabajo hacia el nivel de la empresa, pasando del nivel sectorial al de una sola empresa.
- restringir la intervención del gobierno en la determinación de los salarios mínimos, eliminando así la **indexación**.
- eliminar la intervención del gobierno en las negociaciones obrero-patronales para que los sindicatos no tengan el poder político que les dan las negociaciones monopólicas, quitándole así el poder que tienen los sindicatos sectoriales y descentralizando su poder al dejarlo en manos de las empresas. Esto implica dejar que los salarios sean fijados por las fuerzas del mercado.
- reformar los contratos, impulsando los contratos laborales de medio tiempo y temporales, quitando las obligaciones compensatorias.
- eliminar los pagos de indemnización por despidos, sustituyéndolos con un seguro individual que se constituye por una aportación mensual de la empresa al fondo del trabajador del 3 al 4%.

La arremetida contra la intervención social del Estado, vehiculizada por sus principales instrumentos (la legislación laboral, la seguridad social y el gasto público social), queda claramente expuesta por parte de quien ha ocupado un lugar de avanzada en la introducción del neoliberalismo en la región. La reducción del gasto público, las reformas a la legislación y la privatización de la seguridad social, han estado dirigidas a modificar las condiciones de determinación de salarios y bajos costos laborales para incrementar la competitividad internacional.

El proceso de privatización ha desempeñado un papel clave en la *neoliberalización* de América Latina. De este lado del mundo se realizó más de la mitad de la avanzada de este tipo que se llevó a cabo durante la década de 1990, lo que ha tenido un fuerte impacto en el empleo. En algunos países, representaron entre 30 000 y 95 000 las personas que fueron indemnizadas por cada empresa, y solamente cerca de un 30% los que fueron reempleados⁶. Aun cuando cifras recientes refieren una disminución de la tasa de desempleo⁷ (tanto la OIT como la CEPAL han señalado la disminución en 1,3 puntos porcentuales en el 2005 respecto al 2004) existe un consenso, incluso por parte de los propios organismos referidos, en torno a considerar el valor de dicha tasa para el 2005 (9,6%) dentro del **rango** de los altos niveles que la ha caracterizado desde los años 90.

El menor peso del sector público y de la gran empresa privada como generadores de empleo ha caracterizado a lo que se reconoce como un cambio en la estructura del empleo en la región, en tanto aquellos han sido desplazados por el creciente carácter informal de la ocupación laboral, la cual se ha traducido en bajos salarios, inestabilidad laboral, mayor peso del trabajo a tiempo parcial, baja o nula seguridad social, y por

⁶ *Ibíd.*, p. 83.

⁷ En informe de La CEPAL se destaca que han sido cuatro los países que explican básicamente la caída del desempleo: Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela. Una vez más resulta sintomático que sean estos los países los que hayan liderado este proceso. *Balance preliminar de la economía para América Latina y el Caribe*, CEPAL, 2004.

tanto inexistencia de pensiones de jubilación, así como una profunda crisis en las formas de organización sindical y negociación colectiva. Lo que ha ocurrido, por tanto, es una fuerte limitación al acceso a la ocupación y los ingresos laborales en el sector formal, generándose, simultáneamente a la creciente masa de *desocupados formales*, una gran masa de *ocupados informales*. Según la CEPAL, de cada 100 nuevas ocupaciones creadas entre 1990 y 1994, 81 se correspondieron con el sector informal; en 1995 esa cifra alcanzó un valor de 84, y en 1996 a 85, año en el cual dicho sector se consolidó como la mayor fuente de empleo generado en la región. Según la OIT,⁸ para el 2005, el sector informal representó el 47,4 % del empleo urbano en América Latina: 4,6 puntos porcentuales más que en 1990.

La flexibilización laboral, otro de los sellos distintivos de la impronta neoliberal en el mercado de trabajo, ha arremetido contra lo que fue una creciente sindicalización hasta mediados de los años 70. El proceso de sindicalización formaba parte de lo que fue un relativo desarrollo del poder de los trabajadores que afectaba las ganancias de los empresarios. De este modo, la sucesiva eliminación de conquistas sociales previamente adquiridas ha servido de transferencia permanente de ingresos de la ganancia en detrimento del salario.

Las reformas al sistema previsional ha constituido un elemento central en la estrategia neoliberal en la región: en el transcurso de la última década los sistemas previsionales en la mayoría de los países en América Latina han sido objeto de reformas, las que han estado estrechamente vinculadas a los cambios en las relaciones de trabajo y en perfecta armonía con el carácter crecientemente informal del mercado laboral. Dichas reformas se han centrado en la sustitución de los sistemas públicos por sistemas de ahorros capitalizados individualmente.⁹ La OIT ha señalado¹⁰ que actualmente la cobertura de protección social en la región es menor que la existente antes del periodo de reformas. Anteriormente, en el *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*¹¹, había destacado la marcada diferencia que continúa tipificando a la cobertura de protección entre asalariados formales e informales. Según este documento, el número de asalariados con cobertura de protección social cayó desde un 66,6% en 1990 a un 63,6 % en 2003. Refiere además que en el 2003 el porcentaje de asalariados formales con cobertura en la seguridad social (79,3%) casi triplica al de informales (26,2 %), apuntando, además, que la cobertura de los sistemas de protección social entre los asalariados se ha quedado estancada. La proporción de asalariados urbanos que cotizaban en la seguridad social para el año 2004 fue del 63,6%, el porcentaje más bajo desde 1990, aunque entre las mujeres fue algo inferior 61,8%.¹² No en balde la seguridad social fue la temática en la que se centró la Reunión Ministerial de la CEPAL

⁸ *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*, OIT, p. 7.

⁹ María Bastidas, *Género y protección social* en www.previdencia.gov.br/docs/Curso-LaProteccionSocial/ProgramaESS_LIMAversionfinal.pdf, p.7.

¹⁰ Informe de Trabajo *Decente* en las Américas: una agenda hemisférica, OIT, 2006-2015.

¹¹ *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*, OIT, p. 70.

¹² Norma Alma Espino, *¿A qué modelo de desarrollo apostamos las feministas?* Editorial COMITER, Argentina, 2004.

que se efectuó en el mes de marzo del presente año, lo que evidencia la centralidad que para la agenda regional actual ha adquirido este tópico.

La paulatina terciarización del mercado ha sido otro de los rasgos distintivos de esta reconfiguración del mercado de trabajo en Latinoamérica. Nótese que 9 de cada 10 empleos creados en los últimos años han estado en los servicios y de ellos el 90% se han correspondido con los servicios informales.¹³ Terciarización e informalidad han ido de la mano. Es en este contexto de deterioro del mercado laboral que interesa abordar las principales características del mercado laboral femenino.

2. El mercado laboral femenino en América Latina.

En el año 1967 se proclamó por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, no es hasta 1975 que se puede hablar de un instrumento internacional diseñado en función de promover y vigilar el cumplimiento de dicho objetivo. Esto ocurrió durante la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer realizada en México, donde se aprobó el Plan de Acción Mundial (PAM). En aquella ocasión, los Estados miembros de la ONU decidieron complementar este instrumento con programas regionales. En 1977, en la Habana, los países miembros de la CEPAL elaboraron y aprobaron el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el desarrollo económico y social de América Latina¹⁴. En diciembre de 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; todos los países de América Latina la ratificaron. Durante el mismo periodo tuvo lugar la Conferencia del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1980) y la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de la referida conferencia, en el año 1985.

La IV Conferencia Mundial de la Mujer, efectuada China, 1995, representó otro momento en lo que venía constituyendo la configuración de un marco internacional y regional en torno a la *temática* femenina. Este encuentro tuvo como peculiaridad el estar comprendido dentro del conjunto de conferencias y cumbres mundiales promovidas por la ONU durante los '90 y en las cuales la *rectificación* de lo que estaba siendo la **implementación** de políticas de ajuste en la región se convirtió en nudo medular de la discusión en gran parte de ellas. En Beijín se reconoció formalmente, por parte de los gobiernos presentes, que los procesos de ajuste estructural iniciados durante los '80 habían tenido impactos negativos para las mujeres¹⁵, y con el fin de darles respuesta se trazaron una serie de metas. Con ellas se comprometieron las

¹³ Calcano, Alfredo. *Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina*. p. 81.

¹⁴ CEPAL *Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe* (Formato digital), p. 13.

¹⁵ Al respecto es interesante el hecho de que lo que los gobiernos criticaron de los programas de ajuste estructural fue su *miopía de género*, cuando de lo que se trata, en opinión de la autora, es de reconocer la imposibilidad intrínseca de estos para constituirse en plataforma efectiva para la construcción de estrategias dirigidas a darle solución a la situación de la mujer en el continente. La misma crítica se le hace a la *Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe*, en la cual se hace alusión a la posibilidad de cambios en los programas de ajuste de modo que se reviertan en cambios positivos para las mujeres.

Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y también los gobiernos presentes en la reunión, pero la responsabilidad mayor recayó en los últimos. En materia de empleo, el Programa de Acción Regional consideraba como objetivo estratégico el asegurar a las mujeres el acceso equitativo al trabajo productivo, al empleo, así como velar por la igualdad de oportunidades en cuanto a condiciones laborales y remuneraciones, considerando este modo el más eficaz de superar la pobreza (temática sobre la que había girado la discusión)¹⁶. Tanto el FMI como el BM han defendido la tesis de que la igualdad de género es un medio de promover el crecimiento económico y la productividad del trabajo. A través de los Programas de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF) supervisado por el primero y de lo Programa de Crédito de Soporte a la Reducción de la Pobreza (PRSC) supervisado por el segundo, estos organismos han prestado *ayuda* para la construcción e **implementación** de políticas de género. Lo irónico es que a través de estos mismos programas introducen sus *recomendaciones* de corte neoliberal. Recomendaciones que lejos de crear un sustrato favorable a los procesos de distribución social (los que necesariamente tienen que estar en la base de cualquier estrategia que pretenda darle solución a la discriminación hacia las mujeres) han profundizado los mecanismos de flexibilización y desregulación laboral los cuales están muy lejos de favorecer tales procesos. La posterior revisión que se hizo en el 2000 de las metas trazadas en Beijing mostró lo poco se había podido hacer al respecto. El índice de feminidad de la pobreza (establece la relación entre el número de mujeres y el de hombres que viven en la pobreza) aportado por la CEPAL para el año 2003 resume en una cifra esta idea: superior a 100¹⁷.

No pocos de los autores y autoras consultados para la realización de este trabajo llamaron la atención sobre lo que aparentemente es una contradicción: ¿cómo es posible que el momento actual, en el cual existen un conjunto de organismos internacionales que incluyen dentro de sus principales objetivos eliminar la discriminación hacia la mujer, resulte que los resultados no han estado ni remotamente en correspondencia con lo que parece ser una fuerte y definida voluntad política al respecto? En el texto *Las implicaciones de la globalización económica y la internacionalización del Estado en las mujeres*, Laura Frade afirma muy acertadamente que "los gobiernos de América Latina no cuentan con la posibilidad (esto es, no pueden cumplir) con los compromisos adquiridos durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer en las áreas de economía y pobreza debido a que ya no tienen el control de sus economías, las que están en manos del FMI, BM, BID, OMC"¹⁸. Una de las mayores trabas para la consecución de la PAM, es precisamente el hecho de que concibe a los gobiernos como los principales responsables de aplicar las medidas que en ella se proponen, cuando lo que se está verificando es el debilitamiento de Estado en calidad de garante social y de actor social de peso en los procesos económicos.

¹⁶ CEPAL. *Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y omisiones para una mejor equidad*.

¹⁷ CEPAL. *Panorama social de América Latina y el Caribe 2002-2003*.

¹⁸ Frade Rubio, Laura. *Las implicaciones de la globalización económica y la internacionalización del Estado en las mujeres* p. 10

La configuración de un régimen socioeconómico internacional que apoya formas de trabajo a favor de la profundización de la flexibilidad Alison Vásconez lo explica a partir de las estrategias de competencia de los *países empobrecidos* basadas básicamente en estrategias de precio, a diferencia de los *países enriquecidos* que basan sus estrategias en la innovación y diferenciación. Según esta autora, ello convierte los procesos de flexibilización laboral en un mecanismo idóneo para ahorrar recursos, a lo que la creciente participación laboral de las mujeres ha tributado en no poca medida, en su calidad de mano de obra barata¹⁹. La idea queda aún más clara a través de las palabras de quien asumiera como la responsabilidad de Director General de la OIT en el año 1989, Michell Hansene: “la mano de obra relativamente barata que ellas (las mujeres) ofrecen, ha constituido la piedra angular para la consecución de la competitividad internacional para muchos de los países en desarrollo”. Encauzar el análisis hacia esta dirección permite trascender explicaciones simplistas que conciben el género como meras de formas de pensar en relación a lo femenino y a lo masculino. Adoptar este punto de partida supone la dificultad del camino menos trillado pero indudablemente arroja mucho más luz sobre la complejidad del fenómeno que nos ocupa. Desde esta perspectiva queda al descubierto la funcionalidad de la discriminación hacia las mujeres no sólo en términos de prejuicios machistas, sino sobre todo a la propia reproducción de la lógica neoliberal en nuestro continente.

Es en este contexto que los '90 fueron testigos de una significativa incorporación de las féminas al mercado de trabajo. Aunque varones y mujeres han compartido las consecuencias del deterioro del mercado laboral que ha venido caracterizando a América Latina, investigaciones realizadas al respecto, así como el conjunto de estadísticas ofrecidas por organismos como la CEPAL y la OIT, apuntan a como este proceso ha tenido una dimensión de género. Ha sido precisamente el área laboral la que se ha constituido en uno de los espacios de mayor exclusión y discriminación hacia las féminas, quienes representan, según la CEPAL, más de la mitad de la población del continente. El mercado de trabajo como uno de los espacios donde la exclusión y discriminación femenina adopta sus formas más extremas quedó explícito en la *Cumbre del Milenio*.

Una mirada a las principales características del mercado laboral femenino en América Latina ilustra lo que se ha venido exponiendo.

Hacia el año 1990, la tasa de participación femenina en el mercado laboral representaba el 39% en comparación con el 74,4% de los hombres. Este mismo indicador, pero en el año 1998, alcanzó el 44% para las mujeres y el 74,6% para los hombres, constituyendo los sectores de más bajos ingresos la mayoría involucrada en este proceso²⁰. Para el 2002 la participación femenina fue de un 49,8%²¹. Evidentemente, las féminas se convirtieron en el grupo genérico más dinámico al respecto. Sin embargo, su masiva incorporación al mercado laboral ha tenido lugar en

¹⁹ Prieto, Mercedes. *Mujeres ecuatorianas. Entre las crisis y las oportunidades*. p. 123.

²⁰ Prieto, Mercedes. *Mujeres ecuatorianas. Entre las crisis y las oportunidades*. p. 127.

²¹ María Bastidas. *Género y protección social*. www.previdencia.gov.br/docs/Curso-LaProteccionSocial/ProgramaESS_LIMAversionfinal.pdf

un contexto profundamente marcado por la flexibilización laboral promovida por los programas de ajuste estructural, y que ha conllevado al debilitamiento del cumplimiento de convenios establecidos, como es el caso del Convenio 122 de la OIT, el cual establece el acceso al empleo y la fijación de remuneraciones sin discriminación de sexo²²,

La flexibilidad ha traducido en una no menos profunda precariedad del mercado de trabajo a partir de la informalidad en las relaciones contractuales, de las bajas remuneraciones (esto es, por debajo de salario mínimo), de jornadas laborales extensas, de un pobre acceso a la salud, así como de la existencia de malas condiciones de trabajo puesto que estas bajo la flexibilidad laboral exigen una intervención menor del Estado en la protección de los trabajadores. Investigaciones sobre este tema han señalado que es precisamente en aquellas ocupaciones caracterizadas por condiciones más desfavorables de trabajo y con alta concentración femenina (por ejemplo el servicio doméstico, las trabajadoras por cuenta propia no profesionales ni técnicas y las ocupadas en la microempresa), donde la brecha de ingresos es más alta: los salarios de las mujeres corresponden a poco más de la mitad (52%) de los salarios de los hombres. El trabajo a tiempo parcial ha estado asociado también a las mujeres trabajadoras: al comparar la inserción femenina y masculina en el trabajo a tiempo parcial e integral, se constata un predominio mayor de ellas²³. Téngase en cuenta, además, que por lo general, el seguro social no contempla el trabajo a tiempo parcial, lo que tributa a la sobre representación femenina entre los no protegidos por el seguro social.

La brecha de la tasa de desempleo, no obstante haber disminuido en los últimos años, continúa siendo significativa. . El análisis de las cifras ofrecidas por el documento de la *Cumbre del Milenio* con relación a las tasas de desocupación de hombres y mujeres en la actividad económica durante el período de 1990 al 2002 permite constatar que para las féminas dichas tasas se han mantenido superiores, describiendo una trayectoria ascendente. Mientras que a principios de la década '90 la tasa de desempleo femenina era un 20% inferior a la masculina, en 1998 esta relación alcanzó un valor del 47%, siendo mayor el desempleo en el grupo de mujeres de bajos ingresos, lo que ha implicado que un 19,2% de dicho sector se encuentra desempleado a pesar de su aumento en la tasa de participación. Durante la década referida la tasa de desempleo femenina prácticamente se duplicó: en tanto la tasa de desempleo entre los hombres aumentó de 5,75% en 1990 a 9,69% en 2002, para las mujeres estas cifras oscilaron desde un 7,35% en 1990 a un 12,43% en 2002²⁴. La OIT, en el *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*, apunta que la incidencia del desempleo femenino sigue siendo más alta entre las mujeres que entre los varones y según el *Panorama social*

²² Prieto, Mercedes. *Mujeres ecuatorianas. Entre las crisis y las oportunidades. 1990-2004*. Editorial FLACSO, Ecuador, 2005. p. 272.

²³ Frade Rubio, Laura. *Las implicaciones de la globalización económica y la internacionalización del Estado en las mujeres*. p. 86.

²⁴ María Bastidas. *Género y protección social*. www.previdencia.gov.br/docs/Curso-LaProteccionSocial/ProgramaESS_LIMAversionfinal.pdf

2003 elaborado por la CEPAL, aunque durante la década de los '90 y al 2002 se constató una marcada tendencia tanto al desempleo femenino como masculino, hubo una diferencia importante entre ambos en tanto el incremento del desempleo masculino en la etapa señalada fue de un 3,4%, mientras que para las féminas tomó el valor de 6%.

Esta gran masa de desempleadas se ha desplazado hacia el sector informal, lo que explica que ellas estén sobre representadas en dicho sector. De este modo, aunque hombres y mujeres comparten la creciente informalidad del empleo, ellas conforman la mayoría. Según la OIT²⁵, mientras que la mitad de las ocupaciones femeninas son informales (52%), para los hombres este indicador adquiere un valor de 45%. En el *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*, este organismo expresa que actualmente, 1 de cada 2 mujeres ocupadas trabaja en el sector informal. Este mismo documento señala que incluso dentro del mismo sector informal, la calidad del empleo al interior de estas ocupaciones es inferior para las mujeres. Un dato que lo ejemplifica es el hecho de que las féminas empleadas en las microempresas (subsector que dentro del informal cuenta con mejores condiciones) constituyen un 11,6% en contraste con los hombres que constituyen un 19,6%.

Si bien durante los '90 hubo una disminución salarial para toda la clase trabajadora, la brecha salarial entre hombres y mujeres continuó siendo relevante: si para 1990 este indicador tomaba por valor un 20%, para el 2000 constituyó un 30%²⁶. En el análisis de las estadísticas que brinda la OIT a través del *Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe*, muestra que en todos los segmentos de empleo el ingreso medio de las mujeres es menor que el de los hombres. Según criterios expresados en la *Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe*²⁷, las mujeres ganan en promedio 64,3% de los ingresos masculinos, indicador que toma valores inferiores (52-44 %) cuando se trata de empleos informales. Ello ratifica la idea de que, de manera general, las regulaciones estatales que amparan a un empleo en el sector formal, adquiridas previamente producto de históricas luchas sociales, son más favorables a la existencia de condiciones de igualdad entre los salarios femeninos y los masculinos a partir de la realización de una misma actividad laboral. Sin embargo, esto adquiere el matiz más grave en un mercado laboral gravado profundamente por la impronta informal. Otro rasgo del mercado laboral femenino lo ha constituido la presencia mayoritaria de mujeres ocupadas en sectores de baja productividad con relación a los varones. En las zonas urbanas, representaban el 56% del total de mujeres ocupadas, mientras los varones un 46 %. A partir del análisis de las zonas urbanas de 14 países en el 2003 se constató que el ingreso que percibían las mujeres ocupadas en los sectores de baja productividad era significativamente inferior al de los hombres²⁸

²⁵ OIT. *Evaluación de Pekín, 5 años después*.

²⁶ María Bastidas. *Género y protección social*. www.previdencia.gov.br/docs/Curso-LaProteccionSocial/ProgramaESS_LIMAversionfinal.pdf

²⁷ *Informe de la Reunión de expertos sobre pobreza y género*. En: Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. (formato digital)

²⁸ CEPAL. *Panorama social de América Latina 2003* p. 30.

El porcentaje de los ocupados que cotizan en la seguridad social también ha tenido una dimensión de género. Según la OIT, en su *Panorama laboral 2005. América Latina*, mientras en el sector formal las mujeres representan la mayoría de quienes cotizan en la seguridad social, y esto es algo que se ha mantenido durante la última década, el análisis de la misma cuestión pero al interior del sector informal arroja que son las mujeres quienes representan la minoría. El proceso de privatización del seguro social que ha venido teniendo lugar en Latinoamérica ha afectado principalmente a las mujeres, puesto que el mercado laboral al que ellas acceden se caracteriza por su precariedad, su discontinuidad e intermitencia en mayor medida que para los varones²⁹. Hay que tener en cuenta también que en tanto el financiamiento de la seguridad social proviene del impuesto al salario, quedan sin ningún tipo de cobertura los trabajadores informales, entre los que predominan las mujeres. Ello ha implicado que en la mayoría de los países latinoamericanos la afiliación al sistema provisional constituya un fenómeno más ligado a los varones que a las mujeres, lo que tiene consecuencias negativas en la calidad de vida de las mujeres adultas³⁰.

Reflexiones finales

En América Latina, la década del '90 fue testigo de una profundización de la que venía siendo, aunque a ritmos mucho menos acelerados, una tendencia del mercado laboral: la paulatina incorporación de las mujeres. La **implementación** de los programas de ajuste estructural y el contexto que ayudaron a conformar, difiere en mucho de lo que se pudiera considerar un justo reclamo feminista: la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ha producido en un contexto neoliberal donde se constata un evidente debilitamiento de las políticas laborales tributarias de los derechos de los trabajadores, lo que afecta a los sectores que históricamente han estado en una posición desventajosa como es el caso de las féminas. Como de modo muy sintético expresa Laura Pautsi, “no toda desigualdad implica discriminación: la garantía de igualdad no debe implicar el trato igualitario a quienes se encuentran en distintas circunstancias”.

La convergencia entre, por una parte, la paulatina consolidación de la perspectiva de género en las Ciencias Sociales (muy en especial la temática centrada en la mujer) y su expresión en importantes espacios de debate y construcción de políticas en los marcos internacionales, y por otra, lo que se reconoce como un significativo deterioro del mercado laboral, ha permitido visibilizar el abismo existente entre la igualdad de *derecho* y la de *hecho* conquistada para las mujeres que han señalado no pocos estudiosos del tema. El mercado de trabajo ha sido identificado por estos como uno de los espacios en los que este abismo cobra sus mayores dimensiones. El ámbito de las relaciones laborales ha demostrado ser uno de los *talones de Aquiles* del discurso y la práctica neoliberal cuando de distribución y bienestar sociales se trata.

²⁹ Birgin, Haydee. Desprotección social en las leyes previsionales de América Latina. *Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe*, CEPAL. (Formato digital) p 5.

³⁰ Idem, p. 6

Aunque en las investigaciones que sobre el tema alcanzó a consultar la autora se enfatice la dimensión de género que ha acompañado al impacto de la **implementación** de los programas de ajuste en el continente, considero que es muy importante poner énfasis, además, en el carácter estructural (y no coyuntural) que esta dimensión ha tenido. El hecho de entre el grupo de conferencias y cumbres mundiales que se efectuaron en la primera mitad de la década del '90 bajo el llamado "Consenso de Washington" haya estado incluida la IV Conferencia Mundial de la Mujer no es para nada un hecho ingenuo. Al lado del auténtico interés que debió existir de parte de muchos por lograr una verdadera *emancipación femenina*, estuvieron también presentes otros intereses, entre ellos los del BM y el FMI como piezas claves en el funcionamiento del actual orden social mundial. Es por esto que reconocer la visibilización que la cuestión femenina sin dudas ha alcanzado tanto en las instituciones académicas como en los principales organismos internacionales, no debe llevarnos a un reconocimiento únicamente de carácter cuantitativo. Es imprescindible conocer de qué modos ésta está siendo abordada. En este sentido es relevante el caso de los organismos internacionales pues son los que cuentan con los mecanismos y los recursos para promover e implementar políticas que impactan efectivamente a nuestras sociedades. En mi opinión, los programas de la mujer en manos del FMI y el BM se han convertido en un instrumento (dentro de otro más amplio que es el de los programas de reducción de la pobreza) para afianzar sus influencias en la región. En boca del BM y del FMI, la tesis de que la igualdad de la mujer es necesaria para lograr un mayor crecimiento económico y una mayor productividad del trabajo, parece estar más ligada a un desmedido afán por buscar pretextos para dar a la región sus *paquetes de ayuda*, en los que las recomendaciones de índole neoliberal ocupan un lugar central, que a un verdadero interés por darle solución a esta problemática. Como bien han señalado algunos autores, la realidad es que la discriminación hacia la mujer le es funcional a la lógica neoliberal del mercado de trabajo. ¿Es posible en dicho contexto, entonces, la construcción de estrategias dirigidas a socavar la estructura laboral en la cual históricamente la mujer ha sido discriminada? En la Conferencia de Pekín, se estableció que eran los gobiernos los principales responsables en la implementación de las metas trazadas. La contradicción de esta ubicación de responsabilidades salta a la vista: el neoliberalismo en la región ha arremetido contra la existencia de un Estado fuerte en términos de garante social y de actor de peso en las relaciones económicas. El desmontaje de mecanismos a través de los cuales darle solución a la *cuestión femenina* es evidente. Se trata, pues, no de una supuesta *miopía de género* de los PAE, sino de reconocer la imposibilidad intrínseca de estos para constituirse en plataforma efectiva para la construcción de estrategias dirigidas a darle solución a la situación laboral de la mujer en el continente.

Bibliografía

1. *Tiempos violentos; Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*. Comp. Borón, Atilio A.; Gambina, Julio; Minsburg, Nahum. Colección CLACSO - EUDEBA, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Abril de 1999. 65-83. ISBN Obra: 950-9231-43-6. Disponible en la World Wide Web: <http://168.96.200.17/ar/libros/tempos/gambina.rtf>
2. *Novena Conferencia Regional de la Mujer en America Latina y el Caribe*, CEPAL. (Formato digital)

3. Cravey, Altha. *Engendering the Latin American State*. Latin American Research Review 38.1 (2004)
4. Pazos Beceiro, Carlos. *La globalización económica neoliberal y la Guerra: antagonistas esenciales del desarrollo sostenible y de la salud*. Editorial Felix Varela, La Habana, 2004.
5. Leon, Irene. *Mujeres contra el ALCA: razones y alternativas*. Editorial Agencia Latinoamericana de Información.
6. Espino, Alma. *¿A qué modelo de desarrollo apostamos las feministas?*. Editorial COMITER, Argentina, 2004.
7. Mazzei Nogueira. *A feminização no mundo do trabalho: entre a emancipação y a precarização*.
8. Frade Rubio, Laura. *Las implicaciones de la globalización económica y la internacionalización del Estado en las mujeres*. (Fotocopia consultada en la FEDIM)
9. Ramos, Cecilia. *La retórica de las instituciones internacionales de financiamiento y la reducción de la pobreza en Bolivia*. (Investigación pendiente de publicación por CLACSO)
10. Rivera, Marcia. *Una mirada desde el género: ajuste, integración y desarrollo en América Latina*. Editorial UNESCO, Caracas, 1999.
11. Bastidas, Maria. *Género y protección social*. www.previdencia.gov.br
12. Zapata, Fransisco. *¿Crisis en el sindicalismo en América Latina?*
13. CEPAL. *Panorama Social de América Latina y el Caribe*. (se consultaron, de modo parcial, los informes correspondientes a los años 2005 hasta 1996)
14. CEPAL. *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe*. (se consultaron, de modo parcial, los informes correspondientes a los años 2005 hasta 1997)
15. OIT. *Panorama laboral 2005. América Latina*. .
16. Peter Heller (especialista del Departamento de Finanzas Públicas del FMI) en *¿Puede el FMI contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Milenio a la igualdad de género?* plantea) consultado online